

FALACIAS DE LA IZQUIERDA,
SILENCIO DE LA DERECHA

PÍO MOA

FALACIAS
DE LA IZQUIERDA,
SILENCIOS
DE LA DERECHA

LIBROSLIBRES

LIBROSLIBRES

Santa Engracia, 18, 1.º Izda.
28010 Madrid (España)
Tlf.: 34-91 594 09 22
Fax: 34-91 594 36 44
correo@libroslibres.com
www.libroslibres.com

© 2008, Pío Moa

© 2008, **LIBROSLIBRES**

Diseño de cubierta: © OPALWORKS

Primera edición: marzo de 2008

Depósito Legal: M-15.830-2008

ISBN: 978-84-96088-77-1

Composición: Francisco J. Arellano

Coord. editorial: Miguel Moreno

Impresión: Cofás

Impreso en España – Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

ÍNDICE

PRÓLOGO	11
---------------	----

PRIMERA PARTE: LA IZQUIERDA FALAZ

1. LA CONSTITUCIÓN EN RUINAS	17
1. El respeto a la ley	17
2. Degeneración de los partidos	20
3. Por la Constitución.....	21
4. El abandono de la Constitución	23
5. Defensa y reforma de la Constitución	25
6. La justicia al servicio del delito	26
7. La ilegitimación de la monarquía	27
8. La Constitución en ruinas	29
2. LA PEOR HERENCIA DEL FRANQUISMO: EL SOCIALISMO	33
1. Lo peor del franquismo	33
2. Es preciso movilizarse	35
3. Almudena, la <i>afusilaora</i>	36
4. De bandas de cacos... ..	37
5. De empresarios, «chorizos» y democracia	39
6. El enmafiamiento de los partidos	41
7. Torrente, el héroe socialista	44
8. Socialismo es	46
9. Cálculos electorales y enmafiamiento	47
10. Mucho más grave que el GAL	49

3. LA FALSA MEMORIA DE LA IZQUIERDA.....	53
1. ¿Ignorantes o embusteros?.....	53
2. Los verdaderos olvidados	56
3. La memoria y la concordia	57
4. Pero... ¿qué les habrá hecho Franco?	59
5. Un consejo a Gibson	61
6. Por una historia veraz del PSOE	63
7. Verdad histórica y política actual	66
8. Honrar a los criminales, deshonar a los inocentes	68
9. La importancia de la verdad	70
10. Actualidad de la «memoria histórica»	72
11. La memoria de Esther Tusquets	73
4. LA IZQUIERDA CONTRA LA VERDAD HISTÓRICA	77
1. Crímenes del franquismo y golfería intelectual.....	77
2. Así se escribe la historia	80
3. Símbolos	83
4. Preston, historiador serio	85
5. La república en visión marxistoide	87
6. La crueldad española	91
7. Republicanos	93
8. El holocausto español	95
9. Comunistas y socialistas	96

SEGUNDA PARTE:
SILENCIOS Y ESCRÚPULOS DE LA DERECHA

1. ¿QUÉ HACE LA DERECHA?.....	101
1. Lo malo del PP	101
2. Una sugerencia al PP	105
3. Entre centristas	108
4. El secreto de los estatutos	109
5. Tomar la iniciativa	110
6. Dice la señora Cospedal	113
7. ¿Está Rajoy por derrotar a ETA?.....	114
8. La traición de los jefes del PP	116
9. Menuda tropa	118
10. Un anacronismo de Ansón	118

11. El debate	120
12. ¿Como liberal...?	121
2. ¿ES EL PP UNA ALTERNATIVA?	125
1. La derecha y la democracia	125
2. El PP hacia la bancarrota	127
3. La importancia de mirar al pasado	128
4. PP: indicios de cambio.....	128
5. Pardillo Rajoy	130
6. Autoestima y miedo	132
7. Zapatero bis	133
8. Bajo perfil	137
9. Miseria de Rajoy	139
10. Rajoy y los suyos	141
11. Dos enfermedades del PP	142
12. El problema es el PP	143
3. ¿TIENE LA DERECHA ALGO QUE DECIR SOBRE LA FAMILIA? ...	147
1. Publicidad totalitaria	147
2. Razones laicas para una enseñanza cristiana	149
3. Violencia «de género»	150
4. Un obsceno anuncio de la Comunidad de Madrid.....	151
5. Seis de cada diez	152
6. No permita que la protejan, señora	152
7. Valor y precio. Un ejemplo	154
8. Ley de igualdad contra la igualdad ante la ley.....	155
4. COMPLEJOS SOBRE LA EDUCACIÓN	157
1. Educación para la Ciudadanía y totalitarismo	157
2. Coeducación	159
3. El ejemplo y los nazis	160
4. La ética savateriana	162
5. Un manifiesto de los demócratas gallegos.....	163
6. La ingenuidad de Elvira Lindo	167
7. Volviendo con la enseñanza	169
8. La importancia del espíritu	170
5. LA RELIGIÓN: LA DERECHA CALLA Y HABLA LA IZQUIERDA	173
1. La Iglesia y los políticos.....	173
2. La majadería	174

3. Savater no sabe qué es Dios.....	178
4. De religión y moral	179
5. Guerras, religiones y laicos peculiares	183
6. Politicastros. Modo de empleo	186
7. Santos Juliá defiende a los «pobres»	187
8. La familia cristiana	190
9. Pepiño, la checa y la Iglesia	191
10. La ofensiva contra la Iglesia	193
11. Las comparaciones de Arcadi	195
6. ¿CONDENAR EL FRANQUISMO?.....	199
1. ¿Contra qué se sublevó Franco?	199
2. Juicios del franquismo	201
3. España y la Guerra Mundial	204
4. El lugar de la represión	205
5. Cuestiones en torno a Franco	208
6. ¿Condena usted el franquismo?	210
7. El mundo contra Franco	212
8. La importancia de la derrota del maquis	214
9. El antifranquismo como barbarie y como camelo	217
10. El antifranquismo del PSOE	219
11. Años de hierro y de tocino	220
APÉNDICE: CÓMO DEJÉ A MARX	223

PRÓLOGO

Sobre la base de la sociedad reconciliada y próspera que legó la dictadura de Franco, sobre una alternativa de reforma y no de ruptura con cuarenta años de paz productiva, aun con restricciones a las libertades políticas, años tan distintos de los vividos por las dictaduras marxistas, se produjo en España la transición democrática. Pues bien, ¿cómo ha sido posible que en los cuatro años últimos se hayan invertido todas las bases de la convivencia en libertad implantadas en los años 1975-1978, para entrar en una etapa de alianza entre el PSOE, los terroristas y los separatistas, de acoso a las víctimas del terrorismo, a la Constitución, a la Iglesia, a la libertad de expresión...? ¿Cómo ha sido posible poner en riesgo por enésima vez en la historia de España los beneficios alcanzados a tanto coste, y predicar como una virtud el enlace con un Frente Popular totalitario, que causó la guerra civil y la perdió muy mercedamente?

Podemos encontrar muchos factores para explicarnos tal involución, en particular el enorme predominio de la izquier-

da y los separatismos en los medios de masas y en la enseñanza a todos los niveles. Pero ese predominio, a su vez, no les ha caído del cielo a sus detentadores: les ha costado una gran dosis de esfuerzo, osadía y perseverancia, y aun así nunca lo habrían logrado si la derecha no les hubiera cedido el terreno desde el comienzo mismo de la Transición. La derecha procedente del franquismo, que no la oposición antifranquista, organizó la transición democrática. Lo cual quiere decir que fue posible evolucionar con normalidad desde una dictadura autoritaria a un régimen de libertades. Y lo fue porque aquella dictadura constituyó una réplica excepcional a una situación excepcional planteada por un movimiento revolucionario: Franco no derrotó a la democracia, sino a la revolución, pues el Frente Popular era un conjunto de partidos totalitarios o golpistas (y antiespañoles varios de ellos). Agotado el franquismo con la muerte de su líder, se abrió el camino a la normalidad democrática. Quienes menos derecho tienen a quejarse de la dictadura son quienes la hicieron inevitable (la alternativa, que también pudo triunfar en la guerra civil, habría sido incomparablemente peor). Y son precisamente los antifranquistas retrospectivos (pues en tiempos de Franco los antifranquistas algo activos éramos muy pocos) quienes protagonizan la actual involución: Josu Ternera, Ibarreche, Carod Rovira, Zapatero y su gobierno, Mas, De Juana Chaos, tienen en común su antifranquismo, su falta o escasez de identificación con España y su aversión a la democracia liberal. No por azar.

Pues bien, la derecha procedente del franquismo logró imponer su solución en 1976-1978 frente al irresponsable rupturismo de una oposición que agrupaba por igual a comunistas, grupos más o menos terroristas, maoístas, democristianos, socialistas marxistas y menos marxistas. Y a continuación esa derecha triunfante renunció al combate por las ideas, asumiendo

el supuesto, repetido últimamente por Rajoy, de que la gestión económica es lo único realmente importante, pues, cree él, de ella depende todo. Esta idea, que rechazaría el más tosco de los marxistas, se completaba con la invitación a olvidar el pasado para «mirar al futuro». Pero el futuro es opaco y las pitonisas fallan más de lo aceptable. Con ello no solo reducían la política a niveles realmente pedestres, sino que dejaban a sus adversarios el control del pasado, es decir, la desfiguración del pasado a su conveniencia política actual, y les permitían socavar las bases mismas de su propia legitimación y de la Transición.

Porque la izquierda, que ha recibido golpes tan duros y en principio demoledores como la caída del Muro de Berlín o la evidencia de sus «cien años de honradez», ha podido sobrevivir a ellos transfiriendo su vieja legitimidad ideológica —el marxismo, ante todo— a la historia: era el pasado el que legitimaba a las izquierdas y los separatistas, pues en el enfrentamiento crucial de la guerra civil ellos habían defendido la libertad frente a los «fascistas», los asesinos de la democracia de quienes desciende la derecha en general y el PP en particular. Figúrense, los stalinistas, marxistas del PSOE, racistas del PNV, anarquistas, golpistas del nacionalismo catalán y de las izquierdas republicanas... ¡defendiendo la democracia todos juntos! (aunque a menudo también se mataran entre ellos). La falsedad es evidente, chocante, estridente, y sin embargo se ha impuesto en gran parte de nuestra sociedad, incluso en la derecha. Un fenómeno tal, con tan graves repercusiones políticas actuales, sólo ha podido producirse por una abdicación moral e intelectual casi inimaginable por parte de quienes debieran haber defendido la verdad.

Se trata de una abdicación no del todo nueva en nuestra historia, pues una actitud similar llevó a la claudicación asombrosa que trajo la II República en 1931. La república, se dice,

llegó por un golpe de estado y no por unas elecciones municipales, que además ganaron los monárquicos. Y es verdad. Pero el golpe de estado lo dieron los propios monárquicos, no los republicanos, al renunciar a su derecho y despreciar a sus propios votantes. Los monárquicos, en plena quiebra moral, hundieron la monarquía. Y ahora mismo la derecha futurista está colaborando, con su inhibición, al hundimiento de la democracia traída por ella misma hace algo más de treinta años.

En su época contemporánea, España ha pasado por tres períodos de unos 60-70 años, caracterizados por el intento de poner en pie un sistema de convivencia en libertad. Los dos anteriores fracasaron, y precisamente en sendas repúblicas, la de 1873 y la de 1931-1936. Hoy nos hallamos ante otro momento de crisis, un nuevo desafío histórico del que la democracia española puede salir robustecida o hundirse en una nueva etapa de descomposición. De todos nosotros dependerá.

* * *

Los artículos y comentarios de este libro constituyen algo así como un diario, a veces un tanto angustiado, sobre la evolución política de estos últimos cuatro años, y de ahí sus numerosas reiteraciones, que pueden hacerlo ocasionalmente pesado —espero que no excesivamente pesado—. Las he mantenido, a pesar de ello, porque en gran medida expresan ideas muy a contracorriente y que, por tanto, solo llegan a calar mediante la repetición ante a un ambiente abrumadoramente opuesto, el ambiente «progre», como convencionalmente se le llama. El tono de estos textos, a veces algo agresivo, obedece a la misma razón: la política se ha vuelto muy agresiva por parte de la izquierda y muy sumisa («bajo perfil») por parte de la derecha, y creo que cuando no se replica con cierta indignación a actos indignantes, se facilita la imposición de estos.

PRIMERA PARTE:

LA IZQUIERDA FALAZ

LA CONSTITUCIÓN EN RUINAS

El respeto a la ley

¿Por qué los países anglosajones han resultado, en general, más estables, o mucho menos convulsos, que los del continente europeo o los latinoamericanos? No erraríamos mucho remitiéndonos a un principio: el respeto a la ley. No vamos a ser ilusos y creer que allí todo el monte es orégano; probablemente los anglosajones manipulan o burlan la ley casi tanto como nosotros; pero, con todo, persiste una diferencia, y esa diferencia basta para determinar una historia también distinta.

Somos poco conscientes del enorme paso histórico que supuso la Constitución de 1978. De las muchas constituciones españolas, es la única nacida de un consenso muy amplio, y por ello supuso la reconciliación de las diversas «españas», que desde la guerra de Independencia no lograban avenirse. Con sus evidentes defectos, susceptibles de co-

rrección, garantizaba la unidad y las libertades de los españoles. Sólo grupos menores, la ETA, el PNV y otros separatistas, se opusieron entonces a la reconciliación y a la democracia, y por ello parecían condenados a la marginalidad.

Sin embargo, ha ocurrido lo opuesto, y hoy se sienten todos ellos insolentemente triunfadores. El polvo que ha traído este lodo ha sido la tradición de picaresca, cobardía e incumplimiento de la ley, que desde el principio contaminó, en cierto grado, a los mismos partidos que habían traído o facilitado la democracia. El grupo Prisa —tan ligado a lo peor del franquismo, tan antifranquista... después de Franco—, predicó la «solución política», única posible, aseguraba, para el problema terrorista. Es decir, una «solución» a espaldas de la ley, vulnerando el estado de derecho y legalizando el asesinato como instrumento político. Este enfoque se impuso porque dicho grupo mediático se autoatribuyó el papel de oráculo de la democracia e, inexplicablemente, o quizá no tan inexplicablemente, ese papel le fue reconocido por los sucesivos gobiernos. Sólo muy a última hora cambió la orientación con Aznar, Mayor Oreja y sus demás ministros de Interior; y, como muy bien percibieron los cómplices políticos de la ETA —directamente el PNV e indirectamente CiU y compañía—, la aplicación de la ley a los terroristas terminaría afectándoles también a ellos. De ahí su alboroto.

La «solución política» significó para la ETA la seguridad de que antes o después la democracia se rebajaría a negociar sus exigencias. Sólo necesitaba seguir asesinando hasta que los endebles políticos se sintieran incapaces de soportar el desgaste. Así de simple. De paso, la expectativa de semejante «solución» fomentó una carrera entre diversos partidos para «recoger las nueces». No sólo el PNV; también, detrás de

ellos, los nacionalistas catalanes y otros. La «solución política» ha convertido a los terroristas en un eje fundamental de la política española desde la Transición, en una humillación permanente de la democracia propiciada por los mismos gobiernos.

Hasta llegar hoy al límite de un gabinete socialista presidido por un demagogo irresponsable y convertido en el más activo y eficaz colaborador político de aquellos partidos y grupos que rechazaron la Constitución o la aceptaron a regañadientes. La clave de todo este proceso, insisto, reside en la parcial pero persistente falta de respeto a la ley, la plaga que ha hundido una y otra vez las democracias en Latinoamérica y en España. Sin el cumplimiento de la ley ninguna democracia, ninguna libertad, puede subsistir.

Cuenta Heródoto una anécdota por la que no pasa el tiempo. Jerjes llegaba a Grecia con un ejército imponente, y preguntó a Demarato, un espartano exiliado en su corte, si los griegos serían capaces de oponerle resistencia. Demarato le dijo que, por supuesto, lucharían contra él en cualquier caso. Y Jerjes se rió: «¿Cómo podrían los griegos, que eran hombres libres, combatir contra un ejército superior si no tenían detrás un déspota que les obligara? Simplemente se someterían y adaptarían, para salvar el pellejo». Demarato le contestó: «Son libres, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, a la que respetan mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti. Por eso saldrán a combatirte, tanto si se encuentran mil hombres para poner en línea, o menos, o más».

También habrá suficientes ciudadanos españoles conscientes para frenar y derrotar la arrogante ofensiva en curso contra las libertades y la integridad de nuestra patria. Porque lo grotesco del caso es que no tenemos enfrente a un

ejército terrible como el persa, sino a unos osados golfos políticos cuya arma principal consiste en «esa osadía tan parecida a la impudicia». No cabe imaginar mayor ignominia que la de dejarse arrebatarse la libertad por tales elementos.

Degeneración de los partidos

No existe hoy ningún partido de izquierda que apoye o respete la democracia liberal, la «democracia burguesa», como la llamaban antaño con ánimo destructivo; única democracia aceptable, al menos mientras no se encuentre algo mejor, decía Churchill. El PSOE empezó a democratizarse cuando abandonó el marxismo, pero ha experimentado una brutal involución.

En este panorama, la irrupción de *Ciudadanos* en Cataluña y de UPD en el resto de España tiene el sentido de una posible y deseable regeneración democrática de la izquierda. Puede llegar a ser la izquierda democrática que precisa el país.

¿Y la derecha? El PP actual ha ido a la cola del PSOE. Véase la argucia de Arenas para justificar su fechoría estatutaria: «Como no podíamos hacer nada por impedir el estatuto —ha venido a decir—, hemos tratado de limarle aristas»: la oposición al golpismo anticonstitucional convertida en matización del mismo. Pudo haber aclarado: «Como nos falta convicción, claridad de ideas y valor político para oponernos al proceso de demolición de la ley, nos sumamos a él, para suavizarlo». Por ese camino tendrán más alivio: Zapatero dejará de llamarles extrema derecha. Y ahí tenemos a Rajoy: el chanchullo del gobierno con la ETA, afirma, «no es legal ni moral ni eficaz». Con el primer adjetivo sobran los otros

dos, que solo difuminan el delito y prueban la inconsecuencia palabrera de líder pepeísta. ¿Cómo que no es eficaz? Va camino de liquidar la Constitución, ¿cabe mayor eficacia? Y si no es legal, ¿qué debe hacerse?

Parece muy difícil una regeneración del PSOE, demasiado hundido en una corrupción no solo económica. No tan difícil la del PP, pero también azarosa. Por eso no extraña que muchos de sus votantes en Cataluña apoyaran a Ciudadanos y en el resto de España a UPD, y que apunten por todas partes iniciativas semejantes.

Por la Constitución

Desde antes de la llegada de los socialistas al poder se formó una alianza entre el PSOE y los separatistas, con proyección hacia los terroristas, para destruir la ley constitucional y demoler la convivencia en libertad construida desde la Transición. Con la obtención del poder por esta liga anticonstitucional, antidemocrática y antiespañola, el proceso se ha desarrollado aceleradamente, por medio de actos consumados. De ahí que muchos, incluso entre quienes se oponen a esa infame alianza, den por liquidada la Constitución y piensen en un nuevo periodo constituyente, por lo demás impreciso en extremo. Creo que esa actitud es suicida porque:

1. Da por buenas o por irremediables las maniobras de unos políticos obviamente delincuentes. El precedente autorizaría en lo sucesivo maniobras del mismo género, es decir, la vulneración sistemática e impune de la ley abusando del poder.

2. Deja hundirse sin resistencia a la Constitución más democrática y de mayor consenso en la historia de España. Será extremadamente difícil alcanzar un consenso parecido para establecer una nueva ley. Lo cual implica un peligro de ilegitimidad e inestabilidad crecientes.

Esa tendencia a dar por muerta la Constitución expresa también, en muchos casos, la insatisfacción de mucha gente con los evidentes errores que contiene y con el modo en que fue elaborada. Esos defectos existen, no cabe la menor duda, pero precisamente la ley prevé los mecanismos para corregirlos, por reforma y sin incurrir en golpismo o delincuencia. Y a ellos debe recurrirse. En su momento habría que promover una reforma legal, en el sentido contrario a los deseos de los separatistas, los terroristas y el funesto gobierno de Zapatero.

Pero en todo caso, ahora y luego, la defensa de la Constitución es prioritaria y debe ser el eje de cualquier política que busque la continuidad de la unidad de España y de la democracia frente a quienes las pisotean a diario. Con la Constitución hemos convivido aceptablemente y en paz — esa paz real que han intentado echar abajo los delincuentes en nombre de la «paz» del terrorismo y la corrupción—, y sobre esa experiencia debemos construir y mejorar. España ha sufrido en los últimos dos siglos demasiadas convulsiones traídas, precisamente, por los necios que desprecian el pasado y creen que la historia puede empezar de la nada cada poco tiempo, para acomodarse a sus ideíllas calenturientas. El país ha sufrido demasiado a estos charlatanes voluntariosos y corrompidos, y si no les paramos los pies ahora, podemos perfectamente repetir lo peor de nuestra historia.

El abandono de la Constitución

Desde que llegó al poder el Partido Socialista, tras la matanza del 11-M, su política ha consistido en un ataque permanente, directo e indirecto, a la Constitución, en alianza con el separatismo y, sobre todo, con el terrorismo. Obviamente, esa política deslegitimó al gobierno, lo convirtió en golpista, lo colocó al margen de la ley y empuja al país por rumbos muy peligrosos. Esta evidente deriva puede provocar al menos tres reacciones: imitación de la ETA, abandono de la Constitución y defensa de la misma.

En España existe una opinión antidemocrática también en la derecha. Una opinión poco articulada, y por tanto débil, pero extendida, que ve en los desmanes del gobierno un argumento contra las libertades. Su actividad se limita hoy por hoy a un cacareo indignado pero, desde luego, puede terminar optando por emular a los etarras. Dada su falta de confianza en la democracia, éste sería su camino más coherente, y sólo el miedo y la desorganización le impiden seguirlo, por ahora.

El gobierno, desde el momento en que reconoció el asesinato como una forma privilegiada de hacer política, premiada contra y por encima de la ley, con ruina del estado de derecho, pierde todo valor moral y político —aunque no policiaco— para oponerse a que otros grupos intenten el contragolpe, practiquen el terrorismo y reivindiquen el diálogo, las concesiones y las recompensas otorgadas a la ETA o al fundamentalismo islámico. El caso resulta particularmente sangrante en relación con las víctimas más directas, que han renunciado a la venganza confiando en la aplicación de la ley por el poder público, y contemplaron atónitas cómo éste se compinchó con los asesinos de sus deudos. Al-

go asombroso e increíble, pero real; basta abrir los ojos para verlo. Realidad absolutamente degradante, la vivimos día a día pensando que mientras no haya una violencia en sentido contrario todo va bien.

Otra actitud sería el abandono pasivo de la Constitución. Ésta parece haber sido la línea del PP. Este partido ya no invoca la Constitución, de un modo u otro da por consumados e irreversibles los actos ilegales del gobierno, y hasta colaboró calladamente con él mediante sus propios estatutos autonómicos o ejerciendo una oposición tibia y turbia a la alianza del PSOE con el terrorismo y los separatismos, como si nada grave pasara. De hecho, la Constitución ya no rige y el PP ha dejado de defenderla, y no sólo por miedo a que le acusen de crispar. Esa actitud nos lleva de cabeza al bananismo latinoamericano, a la degradación de la democracia en demagogia, a la vulneración impune y sistemática de la ley por unos políticos delincuentes, a una descomposición social ya hoy visible en tantos síntomas. Algunos creen que mientras la violencia no se extienda vale la pena tragar con todo, olvidando que desde la Transición nunca habíamos vivido sometidos a tal grado de violencia ilegítima, la violencia del chantaje. Con el gobierno convertido en colaborador, el asesino apenas necesita disparar, le basta enseñar la pistola para indicar a la sociedad española «lo que le conviene» si no quiere «algo peor». Envilecimiento radicalmente inadmisibile para cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia cívica.

Por lo tanto, si no queremos enfangarnos más por estos caminos hasta que no haya vuelta atrás, debemos plantearnos seriamente la defensa de la Constitución, incluyendo la aplicación de la ley a los políticos delincuentes, en lugar de resignarnos a que éstos pongan fuera de la ley nuestra democracia.

Defensa y reforma de la Constitución

La Constitución actual es la primera en la historia de España que se hace por un consenso realmente amplio, y no podrá reemplazarse por otra con la misma base. En todo caso, no debe permitirse que unas bandas de demagogos la transformen a su gusto y por medio de hechos consumados, como está haciendo el gobierno en connivencia con separatistas y terroristas. Si esta inmensa fechoría se consiente, las bases de la convivencia quedan rotas, y por mucho que no reaccione una sociedad en gran parte degenerada por la telebasura y la corrupción aceptada, cualquier minoría adquiere legitimidad para recurrir a todos los medios a fin de imponerse. Después de todo, estamos ante el triunfo, en medida muy importante, de una de esas minorías que desde el principio decidió atacar con las armas esa Constitución que establece la unidad de España y las libertades, y en esas condiciones, lo que es válido para ella lo es para cualquiera.

Ciertamente se trata de una Constitución sumamente defectuosa, lo que no es de extrañar a la vista de algunos de sus redactores, como Peces Barba o Herrero de Miñón. Una Constitución que confunde intereses y derechos, lastrada por concepciones socialdemócratas de implicaciones totalitarias y por las puertas abiertas a la fragmentación del país. La crisis política a la que está llevando a España el socialismo exige una reforma legal de aquella ley de leyes, y Vidal Quadras, el Foro de Ermua y otros grupos están poniéndose en marcha al respecto. Una tarea imprescindible.

Para que la reforma cuaje es esencial crear una amplia opinión pública. Y a ello debemos contribuir todos en la medida de las fuerzas de cada cual. Se trata de una acción al mismo tiempo negativa (la denuncia del gobierno anticons-

titucional y su infame alianza) y positiva (la reforma imprescindible para superar los numerosos déficits democráticos que arrastra España).

La justicia al servicio del delito

Una de las primeras medidas del felipismo fue la expropiación ilegal de Rumasa, la madre de todas las corrupciones, para consumar la cual tuvo necesidad de corromper también al Tribunal Constitucional: primera y gravísima estocada a la democracia por parte de los enterradores de Montesquieu. Y, según la ola de corrupción crecía y salía a la luz gracias al periodismo de investigación —hoy casi inexistente—, el felipismo intentó de nuevo poner a la justicia al servicio del delito mediante una ley anti-difamación, que habría blindado a los ladrones, permitiéndoles además acusar ante el juez a quienes los denunciasen. Era un paso crucial para hundir la joven democracia española al nivel del PRI mexicano. Por suerte, la resistencia social, promovida por unos cuantos periódicos y periodistas demócratas —no por la mayoría, ni mucho menos, tampoco por el PP, que iba a remolque— impidió la fechoría.

Como es natural, las maniobras de colaboración del gobierno actual con el terrorismo han requerido el ataque a sus víctimas más directas, representadas mayoritariamente en la AVT. El «diálogo» con los pistoleros exigía de entrada el silenciamiento de sus víctimas, y a ello se aplicó Peces Barba, el turbio *intelectual prestigioso* de la situación, el amigo del héroe de Paracuellos («los buenos») y enemigo de la libertad de expresión en la Universidad. No lograron domar a la AVT, e intentaron otro manejo: una de esas asociaciones li-

berticidas, terminales del partido de los cien años de honradez, puso al entonces presidente de la AVT una denuncia intimidatoria, absolutamente anticonstitucional y tan terrorista como todo el llamado «proceso de paz», al que el gobierno no ha renunciado, desde luego.

Lo grave del caso es que algunos magistrados, cabe suponer que del grupo de Jueces *Contra* la Democracia o similar, han aceptado la denuncia, asombrosa en un país democrático: mediante hechos consumados, esta gente intenta de nuevo avanzar hacia su modelo PRI, poner la justicia al servicio del delito.

El sentido del desmán salta clamorosamente a la vista, y cualquier demócrata tendría que estar denunciándolo a voces desde el momento en que se produjo. Pero el PP ha expresado por anticipado su «respeto» a una decisión judicial de entrada contraria a los usos más elementales de la democracia.

Cuando, hace unos años, comenzó el proceso de hostigamiento a la AVT, contrapartida natural de la colaboración política y más que política con la ETA (recuérdese el famoso chivatazo), elaboré una pequeña denuncia de la situación que permanece actual.

La ilegitimación de la monarquía

Ya he señalado cómo la ley llamada, por sarcasmo, de «memoria histórica» —en realidad, la Ley de la Cheka—, refleja su verdadero carácter y la catadura moral de sus autores al pretender equiparar como «víctimas» del régimen anterior tanto a los inocentes como a los asesinos, extendiendo el reconocimiento de la «dignidad» de los García Atadell y la re-

paración económica (¡por supuesto!) a los pistoleros etarras que empezaron a asesinar en 1968, otro paso en el «proceso de paz» que sigue en pie.

Pero no pocas veces dejamos de percibir lo más evidente. En cierta ocasión coincidí por azar con Fernando Suárez, el político que dio la señal de partida para la Transición en las Cortes franquistas. «Lo grave de la Ley de Memoria Histórica —comentó— es la firma, es quién va a tener que firmarla». No es lo único grave, pero tiene una gravedad excepcional. Pues, en efecto, la ley intenta repudiar como absolutamente ilegítimo el franquismo, con lo cual se ilegítima de paso a la monarquía evidentemente salida de él, y para colmo se obliga a firmar al monarca su propia ilegitimidad. A partir de ahí, la monarquía queda a merced de cualquier politicastro iluminado en espera del momento oportuno. Una jugada artera e insidiosa digna de precedentes como la maniobra de destitución de Alcalá-Zamora por Prieto y Azaña, golpe de estado apenas encubierto.

No se olvide que el PSOE, como el PCE y otros, llegaron a la Transición con la idea de liquidar la «monarquía franquista», romper el plan de reforma del régimen e imponer una ruptura que borrara cuarenta años de historia de España, tan fructíferos en muchos aspectos, para enlazar con el convulso Frente Popular. No tuvieron entonces la fuerza necesaria para llevar a cabo sus planes y tuvieron que aceptar la reforma, pero estos enterradores de Montesquieu nunca han sido leales a la monarquía ni a la democracia y ahora parecen creer que va llegando su momento.

Y he aquí la clave: la monarquía constitucional en la España de los siglos XX y XXI está asociada a las libertades y a un progreso material acumulativo, mientras que la república va unida a la convulsión, a las tensiones separatistas y al arrui-

namiento de la democracia (no se trata de una excepción: la mayoría de las repúblicas del mundo son corruptas dictaduras y las monarquías europeas son democracias). No por casualidad el PSOE ha protagonizado los años de mayor corrupción y mayores ilegalidades desde el poder que ha vivido España, exceptuando las del Frente Popular. No por casualidad el PSOE mostró su verdadero rostro en la oposición con sus manifestaciones tumultuosas bajo las banderas del Gulag y de la república mezcladas, en sus asaltos a sedes del PP, a supermercados, en sus destrozos del mobiliario urbano, etc. Y las constantes movilizaciones y expresiones republicanas en la prensa, los insultos y quemas de retratos y demás acciones muy publicitadas, forman parte de la campaña.

Se nos plantea a los españoles, con creciente claridad, la elección entre la democracia salida del franquismo, la monarquía constitucional salida del franquismo y el nuevo Frente Popular, la Infame Alianza de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. Una elección que sobrepasa en mucho la votación al PSOE o al PP.

La Constitución en ruinas

El gobierno socialista emprendió su carrera traicionando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo para pactar con los separatistas y los terroristas y aislar a la derecha. El precio de esa alianza era, y sólo podía ser, la ruina de la Constitución y la disgregación de la nación española en un cúmulo de nacioncillas inventadas por orates y a la medida de unos políticos mafiosos.

Mafiosos porque han vulnerado la ley sistemáticamente, actúan por medio de hechos consumados y atacan la inde-

pendencia judicial y la libertad de expresión, entre otros desmanes. Tales son los «negocios» que se han traído entre manos el gobierno, los asesinos etarras y los grupos secesionistas. El premio consistiría en la permanencia indefinida de todos ellos en el poder manteniendo un ligero barniz de unidad estatal, porque —creen saber— la sociedad española «es» de centro-izquierda y tragaría con todo. De momento, los negocios del gobierno se han paralizado, porque cada mafia, como de costumbre, pide más y más a costa de sus socios.

Pero el proceso ha avanzado ya mucho. Los estatutos disgregadores (imitados por el PP) están ahí, presentando serios problemas legales pese a no haber sido refrendados por la población. El terrorismo ha quedado justificado y recompensado como un medio de hacer política y obtener ingentes concesiones.

La independencia judicial, nunca asegurada, hace agua por todas partes y el Tribunal Constitucional va camino de convertirse en una dependencia más del gobierno. La libertad de expresión es atacada insidiosamente y tenazmente cada día, con la intención de poner la justicia al servicio del delito.

La falsificación por ley de la historia de España y la recuperación de los viejos odios llega a imponer al Rey la firma de su propia deslegitimación. La política exterior, con premio al terrorismo islámico que tanto ayudó al PSOE a subir al poder, y amistad con corruptas dictaduras enemigas de España, constituye otra fechoría clave de ún gobierno anti-constitucional, y por ello ilegal e ilegítimo...

En este proceso no ha tenido responsabilidad menor Rajoy, con su pseudo-oposición que, en el fondo, ha facilitado las fechorías y ha imitado algunas de las peores. Vivimos en plena involución democrática, y los hechos mencionados,

entre tantos otros, permiten afirmar que hoy la Constitución está en ruinas y necesita ser recompuesta.

Recomposición ardua, con reforma de sus obvios errores de principio, pero emprendida ya por algunos políticos lúcidos, y que debe recurrir a la opinión pública por encima de la corrompidas cúpulas de los partidos y sindicatos.

Los liberticidas han presentado un difícil reto a la sociedad española, y es absolutamente necesario que la sociedad sepa responder a él. Nos va en ello más que el pan, aunque también el pan: la convivencia en libertad.

LA PEOR HERENCIA DEL FRANQUISMO: EL SOCIALISMO

Lo peor del franquismo

Un politicastro sociata escribió en *El Norte de Castilla* contra el digno alcalde de Salamanca, señor Lanzarote, acusándole, entre otras cosas de «buscarse aliados de la catadura de Pío Moa». Con esta desenvoltura parlotea un miembro del partido de Filesa, del GAL y de tantas otras corrupciones; el partido que ha vuelto a promocionar el terrorismo etarra a una altura y protagonismo que no disfrutaba desde hace muchos años, ni siquiera en la época de González, echando por tierra todo lo adelantado contra él bajo el gobierno de Aznar.

En una conferencia en Guadalajara, tuve ocasión de replicar a una chica sociata que despotricaba contra la COPE: «La COPE molesta a muchos. La SER molesta a otros muchos. Esto es normal en una democracia. Pero desde la COPE nadie ha pedido ni ha intentado imponer la censura al Gru-

po PRISA, mientras que el Grupo PRISA no cesa en sus insidias y presiones para silenciar las voces que no le hacen coro, y muy especialmente la de la COPE. Es la diferencia que hay entre los demócratas y los antidemócratas. La diferencia se demuestra en los hechos, no en los autobombos».

Hace meses, con ocasión de otra conferencia que di en el sugestivo pueblo de Caravaca, unos politicastos del mismo partido de los «cien años de honradez» intentaron impedir mi intervención invocando «la ética». Es decir, la ética de los represores de la libertad de expresión, de los promotores de la actual involución política, tan del gusto de los separatistas, de la ETA o de los tiranos tipo Castro o Mohamed VI.

Ha dicho Gabriel Albiac que el socialismo recoge lo peor del franquismo. Exacto. Quizá sea la mejor definición de ese partido. El PSOE que hoy conocemos no pertenece al grupo de los antifranquistas, pues nunca luchó contra aquel régimen (salvo algún aislado gesto testimonial). Y se reorganizó, ya en los años 70, con permiso de la Guardia Civil y con apoyos hasta de la extrema derecha alemana, que veían en él un obstáculo al PCE —éste sí antifranquista aunque, desde luego, nunca demócrata—. Fue un partido completamente infiltrado por la policía, además. Cuando el PSOE acusa al PP de venir del franquismo olvida que los socialistas vienen también de él, de manera muy directa en muchos casos, y recogiendo parte de la clientela de aquel régimen, precisamente la más atrasada, la más afecta a corrupciones como el PER y similares.

Y sobre PRISA conviene repetir incesantemente esta verdad hasta que quede bien establecida: procede de modo todavía más directo de la dictadura, y no lo desmienten sus actuaciones. La fortuna del grupo se forjó en estrecha relación con la administración del dictador, y su principal inspi-

rador intelectual hizo su carrera en el aparato de información (o desinformación) de aquel régimen.

No es normal, no puede ser normal, que tales travestis se erijan en fiscales y acusen a diestro y siniestro e intenten imponer una verdadera dictadura con invocaciones a la ética o al antifranquismo. Tales modos degradan la política. Mientras sigamos aceptando esa impostura, la democracia no estará asentada. Y asentarla pasa por poner las cosas en claro y recordar la historia tal como fue.

Es preciso movilizarse

La actual situación política española puede definirse así: un proceso de destrucción de la Constitución, y con ella de la democracia y la unidad española, por la alianza entre terroristas, separatistas y un gobierno que, por ese mismo hecho, se convierte en golpista e ilegal.

Una sociedad moral y democráticamente sana repudiaría tal infamia. Pero en España, pese a una creciente reacción ciudadana, persiste una gran masa de población desorientada o claudicante. La causa está en el predominio de los medios de comunicación comprometidos de un modo u otro en el proceso golpista, y en la ausencia de una oposición medianamente seria. Por eso es la hora de los ciudadanos.

Cada demócrata español debe empeñarse con la máxima energía en contrarrestar el ataque de los liberticidas. El reto es difícil, pero respondiendo a él se fortalecerá la democracia española. En realidad, la vida avanza afrontando los desafíos, y se hunde claudicando ante ellos. Por otra parte, la respuesta debe ser al mismo tiempo parcial y global. Aspectos parciales, pero muy movilizados, son los tocados por